

Desarrollo alternativo: retos, posibilidades y espacio válido de acción profesional

Carmen Celina Berdugo
Trabajadora Social
Plan Colombia, Departamento del Putumayo

Resumen

El artículo presenta una reflexión multidimensional sobre los cultivos de uso ilícito en Colombia. Desde la visión antropológica de la producción y consumo de la hoja de coca por parte de grupos indígenas en América del Sur desde la época precolombina hasta nuestros días, cubre también las grandes transformaciones sufridas como consecuencia de los cambios políticos, económicos y culturales. Como conclusión, el artículo busca articular la «problemática» al ejercicio profesional de trabajo social, con base en una experiencia de trabajo. Se definen algunos parámetros: a) el trabajo interdisciplinario, b) retroalimentación academia-acción profesional, y c) aporte y responsabilidad profesional frente a los nuevos desafíos de la sociedad colombiana.

Palabras clave: Cultivos ilícitos; globalización; desarrollo alternativo.

Abstract

This paper offers a many-sided approach to the problem of illicit crops in Colombia. Starting from an anthropologic view of the production and consumption of coca leaf by the indigenous groups in South America, from the pre-Columbian era until the present day, it goes on to discuss the great transformations undergone as a consequence of political, economic and cultural changes. At its conclusion the paper seeks to link the issue to the professional practice of social work, based on a field experience. Several parameters are defined: a. interdisciplinary work, b. feedback between the academy and field work, and c. professional contribution and responsibility of social workers in the face of the new challenges to Colombian society.

Key words: Illicit crops; globalization; alternative development.

Artículo Recibido: Junio 16 de 2004. Aceptado: Septiembre 22 de 2004.

Presentación

Los cultivos ilícitos en Colombia contribuyen al comercio y uso mundial de las drogas y por lo tanto hacen al país destinatario de las acciones de la guerra antidrogas, expresión y escenario de la globalización¹ política y económica. El poder de la economía ilegal de las drogas trastorna el ejercicio de la política y la institucionalidad de los países productores, retoma y propicia nuevos conflictos sociales, menoscaba la participación de la sociedad civil y genera más pobreza y destrucción de los recursos naturales. La realidad y el panorama a corto y mediano plazo para Colombia es poco alentador dadas las condiciones macroeconómicas y la naturaleza y características actuales de la guerra.

De lo anterior se desprenden reflexiones e inquietudes que quisiera compartir y enriquecer con los y las Trabajadoras Sociales que participamos en programas y proyectos vinculados con el desarrollo alternativo y especialmente con quienes se han vinculado con el ejercicio profesional en el sector rural como espacio válido de acción social. En un primer momento señalaré la existencia de los cultivos de coca y las políticas de control antidroga en Colombia, especialmente en el Departamento del Putumayo. En segunda instancia plantearé puntos de vista sobre la problemática, basados en una experiencia de trabajo y terminaré formulando algunas reflexiones sobre el tema y el ejercicio profesional.

¹ Aquí tomo la definición de Globalización de Boaventura de Sousa Santos, "Es el proceso por medio del cual una condición o entidad local dada tiene éxito en extender su rango de acción sobre todo el globo y, haciéndolo, desarrolla la capacidad de designar a una condición o entidad rival adversaria como local", 1998.

Los cultivos de uso ilícito en Colombia

Que los cultivos de uso ilícito se han considerado problema por las autoridades locales e internacionales, y que por ello se establezcan acciones para reprimirlas, no es un hecho reciente. Según estudios realizados sobre el tema por el doctor en Historia de la Universidad de Nantes, Francia, Manuel Horacio Vasques, es una problemática de los últimos cinco siglos en la Región Andina y la selva amazónica. El autor tomó como zona de investigación la delimitada por el norte con el Departamento del Cauca, Colombia, al sur con el Valle del Río Marañón, al Norte del Perú, al este con las selvas de la Amazonas y al Oeste con el Océano Pacífico, zona que el autor denomina La real Audiencia de Quito y sus alrededores:

"La hoja de coca vendría a ser un punto de contacto material, mas no de unión, entre dos visiones culturales diferentes, en la cual, se articulaba una forma cultural de ganancia pragmática para cada uno de los grupos en oposición. Para unos la hoja de coca representaba una fuente de riqueza económica y proyección político-social, para los indígenas y mestizos, según nosotros, representó un elemento importante dentro del conglomerado de la "visión de los vencidos" en la que se reflejó no sólo el hecho de pertenecer a un grupo y a una tradición ancestral, sino también un "refugio" en el que se operó una forma de "resistencia" y en consecuencia una "lucha", ya fuese pasiva o no, en oposición a la acción y visión de los vencedores"².

² Vasques Manuel Horacio. "La route de feuille de coca 1492-1992. Entre l'histoire, la mémoire et l'oubli". Thèse de Doctorat, université de Nantes, (Francia) Trois Tomes, 2001. Pp. 527-562.

Según el autor, basado en el archivo General de Indias de Sevilla España, la política general adelantada en esta zona por parte de los funcionarios coloniales fue de extirpación a través de castigos como cárcel, azotes e incluso la muerte de indígenas y mestizos, tanto por su consumo como por su comercialización.

En la historia reciente, las acciones en contra de los cultivos de uso ilícito se registran hacia 1961 con la Convención de Viena a través del Apéndice 1º que declaró la coca como Estupefaciente y en consecuencia se propuso su erradicación antes de 1986. Colombia en correspondencia con los compromisos adquiridos contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y más aun por ser el primer país productor de hoja de coca en el mundo,³ decide en 1994 erradicar los cultivos de uso ilícito mediante fumigaciones aéreas. Paralelo a la interdicción se oficializa una Plan de Desarrollo Alternativo como producto de las negociaciones entre los campesinos y el Estado, luego del movimiento cocalero⁴ de 1996 el cual se centró en que el Estado reconociera el cultivo de coca como un problema social y económico antes que como uno punitivo de carácter jurídico-legal, como se venía haciendo, para lograr de este modo un tratamiento no represivo del problema y el reconocimiento como grupo social con poder de decisión.⁵

Después de haberse establecido una Política Antidroga en el gobierno del Presidente Ernesto Samper, a través de documento CONPES 1994, cada administración plantea reformas ambiciosas en su formulación y ejecución. Es así como a mediados del 2000, en el Gobierno de Andrés Pastrana, para bien o para mal se intensificó la Política antidrogas a través del denominado Plan Colombia. La propuesta fundamental del Plan fue la firma de Pactos Sociales o compromiso de erra-

³ Para el año 2002 según la dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional reportó un área de 103.500 hectáreas de coca.

⁴ Véase, Ramírez María Clemencia. *Entre el Estado y la Guerrilla: Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH-Conciencias, 2001. P. 301.

⁵ Ramírez María Clemencia. *Op. Cit.*, P. 301.

dicación voluntaria a cambio de inversión en infraestructura social, recuperación económica y desarrollo institucional en el nivel local y nacional. Lineamientos que se definieron en programas como “familias en acción”, “empleo en acción”, “vías para la paz y proyectos productivos de generación de ingresos y seguridad alimentaria”, entre otros.

En el contexto actual del gobierno del Presidente Álvaro Uribe el panorama sigue siendo el mismo, en cuanto a la existencia de los cultivos, la situación de pobreza y violencia en la región, salvo con algunas modificaciones en la denominación de las acciones para controlar la situación problema. Existe el reconocimiento del problema social subyacente a la existencia de los cultivos ilícitos pero no hay capacidad estatal para resolverlos. La sustitución como solución es factible y hay experiencias exitosas y bien intencionadas como el programa “familias Guardabosques”⁶ pero se comprimen con la producción de sobrevivencia del campesinado, los tratados de libre comercio y el escenario de guerra que fragmenta e imposibilita cualquier plan de desarrollo social y económico. La ayuda internacional para “resolver el problema” es factible pero se presume que esté condicionada y sobrepuesta a inversión para combatir la insurgencia; quien pone la plata pone las condiciones como actualmente sucede con los proyectos de desarrollo alternativo financiados por la AID (Agencia de Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional).

El contexto

El Putumayo es uno de los departamentos que por su localización geográfica, su variedad climática, grupos

⁶ Vargas Meza Ricardo. *Drogas, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo*. Acción Andina Colombia, 2003. La política de guardabosques del presidente Uribe no está esbozada a la altura de la complejidad de la situación ambiental, ni mucho menos reconoce la gama de fenómenos complementarios a la problemática de los bosques siendo reducida a esquemas nuevamente cortoplacistas y simplificadores del problema de los daños ambientales causados, entre otros, por economías ilegales. Debería contemplarse el suministro recursos para la investigación básica, sistematización de información, procesos pedagógicos y en general el desarrollo de políticas de Estado en materia de protección y manejo ambiental.

poblacionales que la habitan: indígenas, afrocolombianos y colonos provenientes de diferentes regiones del país y fuera de este, lo convierten en un departamento rico por su diversidad cultural; diversidad que entra en conflicto de intereses desestimulando la conformación de un proyecto social y político en la región.

Tanto el medio como el bajo Putumayo son sectores de mayor conflicto social por sus características de colonización, migración de población por razones económicas y políticas provenientes del resto del país. De igual manera, por su atractivas e importantes riquezas naturales y tierras baldías.

En los años ochenta y noventa en el bajo Putumayo se expandió y resguardó el narcotráfico después de las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito del Caquetá y el Guaviare. Producto de dicha actividad la población colona aumentó aceleradamente; crecimiento que se regulaba por sí mismo por la demanda de bienes, servicios, lavado de activos y comercio fronterizo, bajo la autoridad de la guerrilla. La ausencia del Estado facilitó la entrada del narcotráfico y grupos al margen de la ley y la emergencia de una economía extractiva y de enclave, “producción de riqueza sin desarrollo”, lo que justificó la existencia de grandes cantidades de dinero, inversión en lujos y excentricidades en ciertos sectores de la población, contrastando con la violencia física y psicológica, una escasa inversión en infraestructura social, cobertura y calidad en la prestación de servicios básicos como salud, educación, vivienda, vías, servicios públicos básicos, y preservación de los recursos naturales.

La presencia del Estado en el sector rural del bajo Putumayo empezó con acciones aisladas de bajo impacto promovidas desde el nivel central a través de programas de gobierno como el Plan Nacional de Rehabilitación PNR y posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante.

Hacia el año 2000, la posición geopolítica del Putumayo adquiere un atractivo transnacional para megaproyectos como el Corredor Intermodal Belén

do Pará-Tumaco, o la ruta de salida de Venezuela al Pacífico por el Puente Internacional del Río San Miguel. Sólo la mención de estas iniciativas internacionales sustenta la importancia de la región. A la par de dichos proyectos y la riqueza natural que representa no son menos importantes que el ser el epicentro de los cultivos ilícitos en el mundo, 40,4% del total de área de coca en Colombia, es allí donde se focaliza la inversión del Plan Colombia.

Contrario a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo se realiza interdicción y control aéreo de los cultivos de uso ilícitos. Las críticas a estos procesos de negociación, inversión social y lucha antidroga no se hicieron esperar. Según Ricardo Vargas⁷ en una de sus conclusiones al respecto dice:

... la implementación del Plan Colombia con el desarrollo de fumigaciones extensivas, desarticuladas totalmente de iniciativas claras de desarrollo alternativo. Como sustituto de esa ausencia de política, se da inicio a los pactos de erradicación manual cuya interesante pretensión es distorsionada y socavada por la muy débil capacidad del Estado central para lograr una intervención que construya cimientos mínimos pero eficaces a unos fin de desarrollo a corto plazo... Adicionalmente desconoció la necesidad de una base sólida de ordenamiento territorial y ambiental como presupuesto de la política, e impuso una vez más, criterios centralistas que desconocieron la participación creativa de las comunidades y la promoción de las organizaciones no basada en entrega de dádivas, sino como base para el desarrollo regional.

A comienzos del 2002 surgió PILDAET, (Programa de Iniciativas Locales de Desarrollo Alternativo para la Erradicación Temprana), con recursos de la USAID, organismo que canaliza los recursos de Estados Unidos para la Ayuda no militar. Este programa pretendió dar mayor participación y control del ciudadano en su localidad con respecto a la labor de erradicación a cam-

⁷ Vargas Meza Ricardo. *Op. Cit.* P. 109.

bio del establecimiento y administración de los proyectos productivos; eso sí bajo el poder disuasivo de las fumigaciones y la erradicación voluntaria a cambio de recursos.

PILDAET obtuvo grandes logros en ciertas comunidades gracias a su capacidad de organización y trabajo; lo mismo que por su deseo de cambio de actividad productiva, como resistencia en medio de la confrontación, y el deseo de paz y tranquilidad en su región. Por el contrario, en otras comunidades el establecimiento del programa ocasionó grandes conflictos,⁸ dentro de la misma comunidad y esta con las ONGs encargadas de adelantar los procesos por la falta de consenso frente a la erradicación voluntaria o “entrada de la legalidad” por parte de algunos campesinos, lo mismo que por la pertinencia de los proyectos⁹ y la entrega de los recursos.

Una experiencia de intervención

El Plan Colombia fue uno de los programas más ambiciosos en cuanto a inversión y metas, y uno de los “más estratégicos” hasta ahora definidos. Contempló la negociación con grupos alzados en armas, la lucha contra el narcotráfico a través de la erradicación forzosa, la erradicación voluntaria e interdicción, la recuperación económica y social y el desarrollo institucional; presentó criterios de focalización, priorizó áreas geográficas y estableció líneas de acción. Las inversiones en obras y desarrollo social por más de 280 mil millones de pesos se hicieron ver a pesar de la burocracia y la corrupción. Hoy el Putumayo es muy diferente al de hace dos años, quizás la situación de conflicto armado sea la misma, los actos terroristas

⁸ En algunas veredas, los conflictos los regulaban los grupos al margen de la ley en otros se presentaban amenazas contra la vida de funcionarios y miembros de la comunidad. Razón por la cual este tipo de procesos no son los más convenientes dadas las características de guerra.

⁹ Proyectos poco rentables, de productividad a largo plazo y de mantenimiento costoso (palmito, pimienta, palma africana etc, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la familia y su endeudamiento por el acceso a créditos para el establecimiento y mantenimiento de los nuevos cultivos.

continúen atemorizando a la población y quizás el Departamento siga siendo un importante productor de hoja de coca, pero en su estructura y capital social no es el mismo. Las transformaciones están en curso.

Muchos errores se pueden haber cometido tras la implementación de programas de Desarrollo Alternativo. No debemos considerarlos fracasos como lo han calificado algunos analistas sobre el tema, basados en datos y fuentes de segunda instancia; porque no se hayan erradicado las hectáreas de coca prometidas a Estados Unidos, o porque el problema se haya trasladado a otras regiones del país. Pese a todo, la estructura social y el capital social positivo del Putumayo ahora no es el mismo: hoy hay más información, las personas se consideran sujetos de derechos, las acciones del programa han ido dejando en la conciencia de quienes participan, elementos ideológicos y teóricos que se entran en el conocimiento cotidiano y recrean una lógica y un saber popular sobre el mundo y sus posibilidades; son hechos que se convierten en tensionantes hacia nuevas búsquedas de formación y participación en la vida social y política de la región y del país. María Clemencia Ramírez comenta al respecto:

... se trata de un tránsito de una actitud pasiva, como resultado de una relación paternalista con el Estado, hacia una activa, participativa, que demanda ya no solo derechos sociales –educación, salud, vías, créditos y proyectos para la sustitución del cultivo de la coca– sino políticos y cívicos. En el caso del Putumayo no sólo se demanda un Estado que provea servicios sino también el apoyo de este en la apertura y desarrollo de espacios de participación para la definición de políticas y programas para la región.¹⁰

Se critican los programas por la escasa organización y participación de la comunidad pero nunca se comprende el ¿por qué?, no se contextualiza la situación o tal vez falta descubrir los significados; recordemos la existencia de factores históricos que han obstruido el ejercicio de la libertad, el sentimiento de minusvalía que mani-

¹⁰ Ramírez María Clemencia. *Op. Cit.*, P. 308.

fiestan no es otra cosa que una escasa motivación para ser y expresarse, impedida incluso por los mismos miembros de su comunidad como estrategia para preservar sus propios intereses.

La persistencia de la problemática de los cultivos ilícitos es innegable pues se trata de la confabulación de intereses y la lógica del mercado y sus ciclos. Se fundamenta también en la crisis de la agricultura tradicional que no puede competir con los mercados externos, lo mismo que por las leyes prohibitivas vigentes que originan y favorecen la demanda del producto. La legalización de la cocaína por el momento es casi imposible por la pérdida de poder que eso generaría en el ámbito internacional, (lavado de dinero, armas, helicópteros, distribución de drogas, proveedores de insumos); Juan Manuel López argumenta que la razón objetiva es evidente: el mayor incentivo económico (la ilegalidad) acompañado del menor riesgo (la impunidad colombiana) y justificación moral de la necesidad (desempleo y pobreza colombianos) no pueden sino propiciar un crecimiento continuo de esa actividad.¹¹

Adicional a los factores antes mencionados hay un hecho de fundamental importancia para la persistencia de los cultivos ilícitos y es lo que algunos escritores sobre el tema denominan “narcamentalidad” o “cultura de la coca”. Para el caso de los pequeños productores, no es otra cosa que la manifestación de la valoración que el campesino tiene por los cultivos ilícitos; valoración o necesidad que se hace evidente al mantener su cultivo pese a las amenazas, los riesgos de fumigación que les acarrea pérdidas y que lo obligan a desplazarse a otras regiones, o propuestas de sustitución del cultivo, con subsidio, con compra asegurada de la cosecha, con créditos para insumos y mano de obra para el mantenimiento de la plantación.¹² Ese mundo de ideas y de va-

¹¹ López, Juan M. “Colombia: Víctima de la política Antidrogas en Cultivos ilícitos en Colombia”. Memorias del foro realizado el 17 y 18 de agosto de 2000 Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes, 2000.

¹² Garantías propuestas por el proyecto de fomento al cultivo industrialización y comercialización de palmito en el Putumayo, Agroamazonia S.A, Puerto Asís Putumayo.

loraciones, por dicho cultivo, determina su conducta y se transmite de una generación a otra.

Las familias colonas consideran la coca como un cultivo de importancia vital por haber sido y ser su medio de sobrevivencia. Según nuestra experiencia de campo esa valoración de los cultivos de coca se podría originar en un hecho reivindicativo y de privilegio del habitante rural en la región. Los jóvenes, los niños e incluso los adultos, aspiran a cosas que no tuvieron sus antecesores, a una vida aceptable que gracias a un excedente en dinero pudieron y aún pueden tener¹³: garantizar el sustento, comprarse una buena ropa, tener electrodomésticos, educar a sus hijos y darse ciertos gustos a los que no puede acceder el campesino dedicado a otra actividad agrícola.

El quehacer del trabajo social

La oferta diferenciada de espacios de trabajo exige transformación de actitudes y habilidades que permeen el quehacer profesional. Transformación que se justifica con los cambios sociales y culturales que no son otra cosa que adaptaciones que hacemos los sujetos de acuerdo con el tipo de sociedad y Estado derivado de unas estrategias de globalización impuestas por países desarrollados. Mi experiencia de tres años se produjo en el marco de un programa de sustitución de cultivos ilícitos aún vigente en el bajo y medio Putumayo. Para muchos esa particularidad podría romper el diálogo, sin embargo tras la implementación de una política de desarrollo alternativo a los cultivos tipificados como ilícitos hay diversas lecturas que están lejos de ser reproductores o instrumentistas para la eficiencia del sistema; también es un espacio de investigación, de aporte, ante su complejidad, que necesariamente exige profesionales críticos, propositivos y respetuoso de la diversidad.

La experiencia me enriqueció como profesional, y como tal se aportó en la consolidación y permanencia de una

¹³ A partir de la puesta en marcha de la política de erradicación de cultivos de uso ilícito las ganancias disminuyeron y por ende la capacidad adquisitiva de los productores.

propuesta productiva de carácter agroindustrial apropiada y cimentada por asociaciones de pequeños agricultores que fueron cultivadores de hoja coca. También me permitió descubrir en campo, muchas de las debilidades y amenazas de las políticas de desarrollo alternativo al igual que las potencialidades en el aspecto político, económico y social de la región.

Es indudable que las funciones de un profesional son coyunturales de acuerdo con las demandas sociales. La acción profesional frente el panorama actual de los cultivos ilícitos es complejo; lo cierto es que es un problema que deteriora aún más el tejido social por el conflicto de intereses que en el convergen, y el distanciamiento y desconfianza que se generan entre Estado y ciudadano. El terreno es bastante resbaladizo, las mismas condiciones del proceso obligan a un acercamiento entre educación y acción política en el contexto del conflicto, a partir de una mediación-acción de los y las trabajadoras sociales, orientada al postconflicto.

La participación de los y las trabajadoras sociales en la formulación y ejecución de políticas de desarrollo Alternativo es necesaria y fundamental. En especial, su tarea es el fortalecimiento del capital social con el fin de propiciar la demanda y el ejercicio de los Derechos Humanos, del desarrollo humano sostenible que tienen una visión común y un propósito común: velar por la libertad, el bienestar y la dignidad de todos y en todas partes.¹⁴ Las y los profesionales del trabajo social son actores clave para la recuperación social, económica e institucional del país.

Retroalimentación academia-Acción profesional

Colombia es más que el Distrito Capital, es también un país rural. En este sentido, así como se forman trabajadores sociales para los ámbitos urbanos, se requiere la cualificación para los rurales. Profesionales comprometidos y dispuestos, no sólo a ser instrumento de una política, sino partícipes de la investigación social con la capacidad de proponer y formular políticas des-

¹⁴ Véase CEPAL. *Capital social -parte del problema, parte de la solución*. Santiago de Chile. 2001.

de lo rural, para una ruralidad incluyente. Capaces de visualizar un modelo de desarrollo rural en el marco de la globalización a partir de comprender la naturaleza de la crisis del campo, de reflexionar en torno a la situación de pobreza de las familias campesinas,¹⁵ para luego transformarla.

El desarrollo comunitario es un trabajo interdisciplinario, y como característica de trabajo socioeducativo, en tal sentido se requiere de trabajadores sociales con actitudes, aptitudes y habilidades para el trabajo en equipo. Los prejuicios en ciertos espacios sociales e institucionales hacia la profesión, considerada desconocida, imprecisa y en el peor de los casos devaluada, son factores que generan roces u otros problemas que pueden afectar la intencionalidad y eficiencia de la acción social.

Los presupuestos económicos de los proyectos en los que se trabaja suelen ser escasos, por lo tanto es necesario reforzar el criterio personal en la capacidad de negociación para poder llevar a cabo una acción responsable, concertada, y no caer en manipulaciones entre las demandas de la institución y las de la comunidad.

El ejercicio profesional también tiene que generar un crecimiento personal positivo y una integración crítica a la comunidad a la cual se pertenece y a la que se acompaña.¹⁶ Hay que sobreponerse al individualismo. Cada profesional reconstruye conocimiento en ejer-

¹⁵ En los estudios sobre pobreza realizados por el Banco Mundial, la CEPAL y otras organizaciones internacionales, se estima que tres de cada cuatro pobres en el país están ubicados en el campo y son, concretamente, pequeños productores agrícolas independientes o lo que denominamos nosotros, campesinos.

¹⁶ Muchos investigadores y profesionales que trabajan o han trabajado en la región caen en romanticismos sobredimensionando hechos sociales que están corroyendo a las mismas comunidades a través de autoritarismos en los grupos asociativos, en los intereses clientelistas de sus representantes que están lejos de ser democráticos en la solución conjunta de sus problemas. Es así como se han venido deteriorando las relaciones de confianza y poder de convocatoria y gestión de los grupos y movimientos sociales de la región. Otros en cambio sólo registran los hechos, eso sí, con una denotación peyorativa de los acontecimientos.

cicio de su profesión pero no se realizan intercambios por líneas de intervención. ¿Por qué no retroalimentar experiencia?, ¿por qué no conformar un gremio fuerte donde se defiendan espacios de acción que hoy en día son ocupados por otros técnicos y profesionales sin ningún criterio ético-político?; ¿Por qué no tener propuestas como gremio ante estos problemas sociales de nuestro país?

La formación permanente es fundamental. Para este caso la academia debería continuar abierta para el egresado con programas de actualización permanente que faciliten una reflexión sobre la acción y un posicionamiento claro acerca de la exclusión para un análisis crítico de las experiencias de trabajo.

Son muchos los obstáculos y las dificultades que se enfrentan y se seguirán enfrentando a diario. Los espacios de desarrollo profesional, institucional y político, desconocen el trabajo interdisciplinario y ante esto sentimos impotencia, allí todo puede ser fragmentado, lo social, lo económico, lo técnico, pero el camino recorrido indica que hay mucho por aportar y que se puede construir colectivamente.

Bibliografía

- Ander, Egg, Ezequiel. *Metodología y práctica del desarrollo comunitario*. Unieurop, Décima edición. España. 1980. Pp. 43-46.
- CEPAL. *Capital social -parte del problema, parte de la solución. Su papel en la persistencia y en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile. Chile. 2001.
- Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Estudio 3 Latinoamérica. 1971.
- González J. Manuel. “Retos y dificultades de la sustitución de cultivos ilícitos”. *Cultivos ilícitos en Colombia*. Memorias del foro realizado el 17 y 18 de agosto de 2000 Universidad de los Andes. Ediciones UniAndes. 2000.
- Guerrero, Eugenio. “Cultivos ilegales y problemática social” En *Justicia y Paz*, Revista de Derechos Humanos No 3, Bogotá, D.C. (Jul-Dic) 1996. Pp. 63-72.
- López, Juan M. “Colombia: Víctima de la política Antidrogas” En *Cultivos ilícitos en Colombia*. Memorias del foro realizado el 17 y 18 de agosto de 2000 Universidad de los Andes. Ediciones UniAndes. 2000.
- Petrus, A. *Pedagogía Social*. Barcelona, Ariel. 1997.
- Ramírez, María Clemencia. *Entre el Estado y la Guerrilla: Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH - Conciencias. 2001.
- Relatoría del primer Taller Internacional: “Los Cultivos Ilícitos en Colombia” En *Análisis Político* No. 25, Revista del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C., Tercer Mundo Editores. (May, agst) 1995. Pp. 80-86.
- Sousa Santos, Boaventura de, *Lo social y lo político en la postmodernidad*, Traducción Consuelo Bernal y Mauricio García. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Ediciones UniAndes, 1998. Bogotá D.C.
- Vargas, Ricardo. *Drogas conflicto armado y desarrollo alternativo, una perspectiva del sur de Colombia*. Acción Andina Colombia. Gente Nueva Editorial. Bogotá, D.C. 2003.
- Vásquez, Manuel. “Una pregunta para la Historia: La Hoja de coca en la Real Audiencia de Quito (Ecuador) 1612-1748” En *Folios*, Revista de la Facultad de Humanidades, Universidad Pedagógica Nacional. Editora Guadalupe Ltda, Bogotá, D.C. 2003. Pp. 49-67.
- Uribe Sergio y Sara Mestre. *Los Cultivos Ilícitos en Colombia: Evaluación de su extensión, las técnicas y tecnologías para la producción, rendimientos y magnitud de la industria*. 1995.